



Según se desprende del contenido de la consulta, se prevé la creación de una base de datos automatizada a la que podrán acceder las empresas asociadas con objeto de que por las mismas puedan cumplimentarse debidamente los partes de accidentes de trabajo sufridos por sus trabajadores con objeto de agilizar las comunicaciones con estas empresas. Entre los datos que figurarían en dicha base, la consultante cita el día del accidente, días probables de baja, visitas efectuadas por el lesionado y código de la lesión según la Organización Mundial de la Salud.

I

En primer lugar debe precisarse que en el caso concreto de la consulta nos encontramos con un tratamiento automatizado de datos de salud definidos en el artículo 5 g) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, como “Informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.”

A su vez, el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 señala en su número 1 “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal (...); cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley(...). El artículo 7 define los datos especialmente protegidos señalando en su número 3 “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente.” Y en su número 6 “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de los servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar un

interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.”

A su vez, el artículo 8 de la Ley Orgánica 15/1999 establece: “Datos relativos a la salud.

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad.”

También el artículo 10 del Real Decreto 1720/2007 señala entre los supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de datos en su número 2 “No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: a) Lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concorra uno de los supuestos siguientes:

c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

II

Para analizar la legitimidad del tratamiento de los datos de salud por la consultante, ha de partirse del hecho de que la misma es una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, cuya definición se recoge en el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en los siguientes términos: 1 *“Se considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas”.*

Conforme al artículo 68.2 la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social comprenderá las siguientes actividades:

“a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995, 3053), de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.”

El artículo 67 que le precede dispone: “Entidades colaboradoras.- La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en la presente sección.”

A su vez, el artículo 198 del mismo texto legal señala: “Gestión y colaboración en la gestión.- La gestión del Régimen General de la Seguridad Social, así como la colaboración en la gestión por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y empresas, se regirá por lo dispuesto en el capítulo VII del Título I de la presente Ley.”

Por su parte, el artículo 70 dispone: “Empresarios asociados.-1. Para formalizar la protección respecto a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal a su servicio, los empresarios podrán optar entre hacerlo en la entidad gestora competente o asociándose a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad de la Seguridad Social.

2.Los empresarios asociados a una Mutua a los fines de las presentes normas, habrán de proteger en la misma entidad a la totalidad de sus trabajadores correspondientes a centros de trabajo situados en la misma provincia, siempre que ésta se encuentre comprendida en el ámbito territorial de la Mutua. A estos efectos se entenderá por centro de trabajo el definido como tal en la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

3. Las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales habrán de aceptar toda proposición de asociación y consiguiente protección que se formule, respecto a su personal, por los empresarios comprendidos en su ámbito de actuación, en los mismos términos y con igual alcance que las

entidades gestoras en relación con los empresarios y trabajadores que tengan concertada esta contingencia con las mismas.

La falta de pago de las cuotas por un empresario asociado a una mutua no podrá dar lugar a la resolución del convenio de asociación.”

El artículo 99 regula la inscripción de empresas del siguiente modo: “1.- Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social que haya de asumir la protección por estas contingencias del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.”

El análisis conjunto de las normas citadas del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, permite deducir que la misma constituye Ley habilitante suficiente para el tratamiento de los datos de salud de los trabajadores de aquellas empresas que hayan elegido a una Mutua para la prestación de la asistencia sanitaria y abono de las prestaciones económicas a que aquéllos tengan derecho en los casos de accidente laboral o enfermedad profesional, entre otras. El tratamiento de datos de salud realizado con este fin, sin el consentimiento del afectado, será conforme con lo señalado en los artículos 7.3 y 6, y 8 de la Ley Orgánica 15/1999 y su correlativo artículo 10. 2 a) y c) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, reseñados al comienzo de este informe.

Cabe añadir que el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social contempla en su artículo 10 el alcance de la cobertura que han de prestar estas entidades, “en los mismos términos y con igual alcance que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social asumen la cobertura de que se trate”. Y su artículo 12 añade que “las Mutuas podrán establecer instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores para la prestación de la asistencia debida y la recuperación plena de los trabajadores accidentados en el trabajo y enfermos profesionales”. Y su artículo 15. 4 señala que “En todo caso, el suministro de datos que puedan realizar las Mutuas estará sometido a lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal (antecedente de la actual Ley Orgánica 15/1992).”

Así mismo, en relación con la gestión de la protección respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el artículo 61. 2 establece que “De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este Reglamento (.....), en los supuestos de incumplimiento por los empresarios asociados a las mismas de las obligaciones en materia de



afiliación, de altas y bajas y de cotización, se estará a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley General de la Seguridad Social, no pudiendo la Mutua proceder a la resolución o suspensión del convenio de asociación y estando obligada la entidad, por tanto, a hacerse cargo de las prestaciones económicas y sanitarias a que tengan derecho los trabajadores empleados por dichos empresarios, (.....).”

Completando el marco regulador establecido por la Ley General de la Seguridad Social, las normas de este Reglamento habilitan el tratamiento de datos de salud de los trabajadores que acudan a sus instalaciones y servicios sanitarios por haber sufrido un accidente laboral sin necesidad de consentimiento del afectado.

III

Sentado lo anterior, y respecto a los datos que la consultante incorporará a su base de datos electrónica, que figurará en la extranet de la Mutua a disposición de sus empresas asociadas respecto a sus trabajadores concretos, y que deben aparecer en el parte de accidente de trabajo de los trabajadores afectados, nos encontraríamos ante una cesión de datos tal como la define el art 3. i) de la Ley 15/1999 “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.”

Al respecto, se ha de tener en cuenta la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación, recoge un formulario en el que debe figurar la descripción de la lesión sufrida por el trabajador, parte del cuerpo lesionada, con una breve descripción literal, código que corresponda de acuerdo con unas tablas publicadas como anexos a dicha Orden, grado de la lesión que será el mismo que conste en el parte médico de baja, médico que efectúa la asistencia inmediata y tipo de asistencia hospitalaria o ambulatoria con identificación del establecimiento.

Por consiguiente, la incorporación de los datos aludidos a una base o fichero de datos informatizada a que se refiere la consulta, no resultaría conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, cuando los datos que se comuniquen no respeten los principios señalados en el artículo 4 de dicha Ley , que dice: “1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades determinadas , explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieren sido recogidos. “

Por otra parte, y con la finalidad de facilitar a las empresas la comunicación de los mismos y agilizar la tramitación que en esta materia corresponde también a las Entidades Gestoras o colaboradoras, dicha Orden en su artículo 2.1 establece que “El empresario cumplimentará, según los casos, el parte de accidente de trabajo (...) en los modelos oficiales y según las instrucciones que figuran en el anexo de la presente Orden.

El empresario conservará su ejemplar, que le servirá como justificante, entregará la correspondiente copia al trabajador accidentado o representante que lo justifique, caso que el accidentado no pueda hacerse cargo de él personalmente, y enviará a la Entidad Gestora o colaboradora los tres ejemplares restantes.”

A su vez su artículo 4 dispone que “La Entidad Gestora o colaboradora deberá codificar las casillas sombreadas que figuran en los modelos parte de accidente de trabajo (...) y subsanar los errores advertidos en la cumplimentación de los mismos. Si la Entidad Gestora o colaboradora no pudieran subsanar dichos errores, devolverá los modelos a la Empresa para que en el plazo máximo de cinco días hábiles, le sean remitidos debidamente cumplimentados. “

Esta dinámica en la comunicación del parte de accidente por la empresa a la Mutua colaboradora evidencia que los datos relativos al accidente sufrido por el trabajador han de ser suministrados por el empresario a la Mutua colaboradora y no al revés, de modo que la base de datos a crear por la Mutua con la exclusiva finalidad de facilitar la tramitación de un accidente de trabajo, no puede extenderse a datos que no sean los requeridos por el modelo ni a los que el empresario deberá conocer para poder cumplir con las obligaciones que se le asignan.

A su vez, la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre ha sustituido los modelos oficiales correspondientes al parte de accidente de trabajo que fueron establecidos por la Orden de 16 de diciembre de 1987, si bien no incluyen variación respecto a los datos en el sentido analizado, estableciendo en su Disposición adicional primera que “Transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Orden (1 de enero de 2003), la cumplimentación y transmisión de los modelos establecidos en el artículo 1, sólo podrá efectuarse por medios electrónicos a través de la aplicación informática aprobada en el artículo 3º de esta norma”.

III

En cuanto a las medidas de seguridad que se han previsto para dicho fichero de NIVEL ALTO y con las condiciones de acceso para las empresas clientes de la Mutua que se describen en la consulta, ha de señalarse que *si e/*

fichero incorporase los datos relacionados con la concreta enfermedad o accidente padecido por el trabajador sería aplicable el artículo 81.3 del Reglamento que establece que “Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:

a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión creencias, origen racial, salud o vida sexual.”

En lo relativo a las condiciones concretas de acceso a los datos de salud, ha de estarse a lo dispuesto en los artículos 88 y siguientes del Real Decreto 1720/2007 que describen detalladamente las medidas de índole técnica y organizativa que deberán cumplirse por el responsable del fichero, en este caso, la Mutua consultante.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.